

Ecuador Agosto

Hugo González
Mario Unda

1. El mes de agosto se presentó con una aparente baja en el nivel de conflictividad. La impresión es causada por una reducción en la intensidad de los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, y por la centralidad que comenzó a tener la campaña política para las elecciones que a fines de septiembre elegirán a los miembros de la asamblea constituyente.

No obstante, los enfrentamientos verbales y las distancias entre *el gobierno y la oposición* (en sus diferentes caras) continuaron siendo uno de los principales ejes de conflictividad: las distancias Ejecutivo-Congreso se reafirmaron, por ejemplo, con la inasistencia del presidente a la sesión solemne del parlamento con motivo del 10 de agosto (el día de la independencia), y con la reiteración de sus opiniones sobre la necesaria disolución del congreso por parte de la futura asamblea constituyente. Ya en plena campaña, tomó más visibilidad el enfrentamiento entre el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral: el motivo estuvo en dos temas: la propaganda del gobierno (tomada por el TSE como propaganda electoral de la lista gobiernista), y el reporte de los gastos de Alianza País en la segunda vuelta presidencial (que el TSE considera incompletos y falseados). El enfrentamiento con la prensa se presentó con la toma de posición de los principales medios de comunicación en torno al decreto ejecutivo que permite la pesca incidental de tiburón, y alrededor del “socialismo del siglo 21”, puesto en circulación en ocasión de la realización de un par de eventos sobre el tema. Por último, la confrontación Empresarios-Gobierno ha seguido el cauce de los temores empresariales sobre las políticas económicas y los acuerdos comerciales; hacia el fin de mes, los grandes empresarios entregaron al gobierno un documento en el reafirman su programa básico: mantener la dolarización, reducir impuestos, eliminar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, priorizar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Europa y el área andina.

Un segundo eje de conflictividad se constituye alrededor de diversos *conflictos locales*. Conflictos entre instancias diversas de gobierno local (municipios vs. consejos provinciales, por ejemplo en Manabí en torno al peaje en las carreteras); conflictos al interior de los municipios, por el control de la institución, entre partidos o grupos de concejales y alcaldes. Pero también conflictos entre sectores de la población y los municipios u otras entidades públicas por la carencia o mala calidad de servicios públicos o en torno a la tierra urbana y el ordenamiento territorial (como en Quito). Disputas socioeconómicas entre actores locales (por ejemplo, en Cuenca, entre taxistas formales e informales) o marchas en protesta por el incremento de la violencia y la inseguridad (en Manta). Finalmente, movilizaciones apoyando la provincialización (como en santo Domingo de los Colorados).

Un tercer eje que apareció, de modo masivo y dramático, fue *el Plan Colombia*, ahora por el desplazamiento de cientos de campesinos colombianos que presionaban por la reiniciación de los diálogos con el gobierno de su país.

El cuarto eje observado en este mes han sido los conflictos *socioambientales*, de impacto nacional o local. En el centro de la atención (y de la acción social) han estado el petróleo

(en la Amazonía, relacionados con las presiones de comunidades locales por más empleo en las compañías –caso Oriental– o con el ya largo juicio ambiental que comunidades amazónicas mantienen con Texaco-Chevron), la minería (sobre todo Azuay, donde las comunidades, especialmente indígenas, se oponen a las actividades de las transnacionales), el manejo forestal (estimulado por un decreto ejecutivo de control de la explotación de bosques: los pueblos huaos y cofanes pugnan por hacerse cargo del control), con la pesca y las especies marinas (el conflicto surgido en relación con la pesca del tiburón) y, por último, el manejo de la basura (como en Los Bancos).

El quinto eje ha estado marcado por los conflictos *laborales*: trabajadores del ministerio de Economía por demandas salariales; de Andinatel por la firma del contrato colectivo; del trolebús, en Quito, también por el contrato colectivo, salarios, condiciones de trabajo; maestros por partidas presupuestarias y nombramientos –en fin, las demandas laborales, represadas en regímenes anteriores comienzan a reactivarse, a medida que los trabajadores perciben un ambiente de apertura democrática.

Y un sexto eje agrupa a conflictos en los que han participado sectores *estudiantiles y juveniles*: sus protestas han girado alrededor del costo de las matrículas, de los precios de los víveres o de la represión policial contra grupos juveniles que desarrollan actividades de cultura urbana (como los graffitis).

En fin, que esta **aparente baja de la conflictividad muestra más bien** la centralidad de la campaña electoral y una (aún débil) tendencia al apareamiento (o re-apareamiento) de conflictos que venían represados.

2. Otro aspecto importante tiene que ver con el tratamiento de los conflictos: en torno a algunos conflictos socioambientales y laborales se han puesto en funcionamiento comisiones de seguimiento y veedurías en las que participan los diversos actores involucrados.

Podríamos mencionar algunos ejemplos. Para tratar el conflicto entre la Petrolera Oriental y la comunidad de la parroquia Dayuma, en la Amazonía, se ha formado una comisión en la que, a más de los involucrados, participan los Ministerios de Gobierno y de Minas y Petróleos. Se espera dar una salida al conflicto a través de una veeduría que vigile el cumplimiento de los acuerdos; estará constituida por representantes de la comunidad afectada, de la petrolera, del gobierno y de la Iglesia. De igual manera, en lo que tiene que ver con la situación que llevó a los enfrentamientos de las fuerzas militares y policiales con las comunidades afectadas por la acción de las compañías mineras, el nuevo Ministro de Minas y Petróleos ya se puso al frente de la situación, para lo cual ha pedido ayuda y asesoramiento a técnicos de otros países, para buscar salidas más equitativas al conflicto.

La situación abierta entre el gobierno y sectores ambientalistas que se oponen a la puesta en ejecución del decreto que permite la pesca incidental de tiburón y la comercialización de las aletas ha ido tomando cuerpo a lo largo de este mes, afectando los niveles de aceptación popular que mantenía el gobierno en los primeros meses de su gestión. El conflicto sigue abierto, ya que el gobierno de Rafael Correa ha manifestado que no derogará el decreto; las organizaciones ambientalistas han ido incrementando sus protestas, que han llegado a

involucrar a organizaciones ambientalistas internacionales. Los pescadores artesanales, por su parte, se movilizaron en respaldo de la decisión gubernamental.

3. Mientras tanto, se están tejiendo ya las posibles alianzas para lograr una mayoría en la Asamblea. La izquierda ve en este proceso la posibilidad de rearticular fuerzas que le permitan en el futuro mantener y consolidar su presencia y una correlación de fuerzas favorable, que le permitan lograr los cambios trascendentales que la mayoría del pueblo reclama.

Si el gobierno de Correa logra una relación de fuerzas a su favor en las elecciones, las posibilidades de fortalecer una tendencia a nivel regional (Venezuela, Bolivia, Ecuador) estarían más cercanas pues, con la visita de Hugo Chávez a nuestro país y a otros países de la región, se logró un avance en la consolidación de una tendencia más radical en la región, disputada también con una posición más reformista del gobierno brasileño de Lula da Silva. Las propuestas en el campo energético, en lo relativo al Banco del Sur y al Alba se han ido poco a poco afianzando en la región, lo cual se plantea como un avance importante en la perspectiva de superar las políticas neoliberales y construir el “socialismo del siglo XXI”.